

El sistema electoral sinaloense: diseño y rendimiento institucional (1995-2001)*

ERNESTO HERNÁNDEZ NORZAGARAY

RESUMEN

El propósito de este artículo es realizar un análisis del diseño y el rendimiento institucional del sistema electoral de Sinaloa, a partir de algunas de sus variables básicas, como son las modalidades de la combinación del principio mayoritario y el proporcional, la fórmula electoral, el umbral efectivo y la magnitud de las circunscripciones. A partir de estos elementos, se realiza el estudio de los efectos del sistema electoral en el sistema de partidos de Sinaloa, para lo cual se utilizan algunos índices propios de la Ciencia Política contemporánea.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the design and institutional performance of electoral system of Sinaloa, from some of its main elements, like the mixture of plurality and proportional principles, electoral formula, effective threshold and the size of electoral districts. From this elements, the paper studies the effects of electoral system over Sinaloa's parties system, using some political science quantitative indexes.

El estado de Sinaloa experimentó seis leyes electorales durante el siglo XX: la de 29 de abril de 1924 que expidió la XXX legislatura y estuvo vigente hasta 1968, cuando la XLV legislatura incorpora varias de las reformas de la ley federal de 1963, La ley electoral de 1974 que expidió la XLVII legislatura y la de 1979 que decretó la XIX legislatura. Ambas fueron producto de los cambios políticos iniciados con el movimiento estudiantil de 1968 y la crisis de régimen que se vive en la contienda presidencial de 1976.

Ese proceso reformista constituye el más sólido antecedente de la ley que aprobaría el congreso en 1992 y las reformas constitucionales y regla-

* Este trabajo es el segundo capítulo del texto Sistema Electoral y el Sistema de Partidos en Sinaloa (en prensa)

mentarias de 1995 y 1998. Y, aunque no fue un periodo de grandes cambios es digno de mencionar el debate inter partidario a finales del 2000 y principios del 2001, porque se pusieron sobre la mesa, como nunca, aspectos sustantivos e inéditos en materia electoral.

Una primera interpretación de esa mecánica reformista nos lleva irremediablemente a que la mayoría de los cambios electorales fueron consecuencia natural de lo que acontecía en lo federal. En este sentido, la reforma electoral de 1924 fue producto de la adecuación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que sólo en el artículo 34, fracción III, reconocía el derecho de los ciudadanos a "asociarse para tratar los asuntos políticos del país" sin que explícitamente hubiera un apartado referido a los partidos políticos y, mucho menos, organismos electorales que regularan la competencia.

130

La ley de 1968, por su parte, registraba con gran retraso lo correspondiente a la reforma federal de 1963 que, entre otras modificaciones, destaca la que abría el Congreso de la Unión a los llamados "diputados de partido"; la de 1973, no menos importante, buscó adecuar la ley a las necesidades que planteaba la "apertura democrática" echeverrista, que traía entre sus principales novedades el derecho de voto a los jóvenes mayores de dieciocho años y el registro a nuevos partidos, que en Sinaloa, de momento no agregó nada a los ya existentes.

En cambio la ley electoral de 1978 que respondía a la crisis del régimen que había producido la elección presidencial de 1976, donde el sistema político perdió una parte de su legitimidad sustentada en lo que el sociólogo español Ludolfo Paramio llama el fin del "mito fundacional de la Revolución mexicana",¹ cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez en su vida no tuvo oposición en la competencia por la principal magistratura del país. Ya sea porque el Partido de Acción Nacional (PAN) no postuló candidato; la izquierda con una capacidad potencial que se encontraba fragmentada y fuera del sistema de partidos, y el resto de ellos, que luego en el argot electoral se reconocerían como "paraestatales", decidieron en un acto de pragmatismo apoyar a José López Portillo quien, años más tarde, en un ejercicio de egolatría se auto denominaría como el "último presidente revolucionario de México".

¹ Paramio, Ludolfo (1991) "El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América latina ante la década de los noventa", Madrid, *Revista de Estudios Políticos*, núm.74, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Como se han encargado de registrar los historiadores de la política nacional, esto provocó en gran medida la reforma mayor de 1978, la cual modificó las bases de sustentación del régimen político y supuso la incorporación de nuevos partidos, que en lo sucesivo, serían considerados “instituciones de interés público” y, subsecuentemente, ampliarían o conquistarían prerrogativas legales para su participación en la competencia electoral.

En esta línea, a principios de los noventa, se llevó a cabo una nueva reforma que condujo a un proceso de cambio institucional que daría forma paulatinamente al Instituto Federal Electoral (IFE) y a organismos electorales similares en los estados, y por último, la reforma electoral sinaloense de 1995, en la línea de la federal de principios de los noventa, sirvió para dar mayores garantías a la competencia política mediante una mayor profundización del proceso lento de institucionalización del país.

La reforma mayor que se vive en el país en 1996, obliga a que sus símiles locales garantizaran un conjunto de principios y condiciones equivalentes a los prescritos en el sistema electoral federal y, en lo sucesivo, serían regulados por el principio de constitucionalidad de los actos del legislador local en esta materia.²

No obstante, pese a distintos intentos, donde destacan los del periodo 2000-2001, los partidos con representación en el Congreso del Estado, no pudieron concretar reformas que ya son parte del proceso de institucionalización del país y las cuales se encuentran contempladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), como también, en muchas de las leyes electorales de los estados de la República.

Sin embargo, esta mecánica de cambio, no sería inteligible sin antes entrar a lo que, desde nuestro enfoque, constituyen las bases mínimas de interpretación de este proceso reformista.

Hasta la reforma de 1978 —y, podríamos agregar que hasta mediados de los ochenta— el sistema electoral mexicano obedecía a un sistema institucional de partido mayoritario predominante donde era inexistente una verdadera competencia electoral. Un 80 por ciento de los votos eran favorables al PRI y, en consecuencia, también las mayorías calificadas en los congresos locales lo cual muestra la uniformidad del sistema electoral y de representación. Sin embargo, desde la misma reforma de 1978, la

² Woldenberg, José, *La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas*. Ediciones Cal y Arena, México, 2000, pp. 452-453

elite gobernante pretendió modificar esta tendencia incluyendo en las pa-
peletas a nuevos partidos, sobre todo modificando la composición de los
órganos de representación política. La geografía política, entonces, fue
cambiando paulatinamente de tal suerte que hoy "el país es otro", como lo
vemos en la composición de los contrapesos político-institucionales re-
gionales. Y, sobre todo, por el fenómeno de la alternancia que ha poblado
todos los rincones del país, coronándose con el triunfo presidencial de
Vicente Fox como candidato del PAN y el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM).

132

Si el rediseño institucional tuvo una amplia convocatoria buscando
organizar a las más diversas sensibilidades que se expresaban en una so-
ciedad de modernización vertiginosa, como se manifestó en las consultas
de finales de los setenta en la Secretaría de Gobernación y, en estos años
ante el IFE o los órganos electorales locales, la fórmula siempre tuvo un
carácter simplificador de las preferencias políticas. Es decir, el entramado
normativo generó sucesivamente en el nivel federal y local, un sistema de
dos o tres partidos electorales y parlamentarios reduciendo al resto a ex-
presiones testimoniales.

Esto se puede apreciar en el cuadro 1 muestra el cambio sustancial
que ha tenido lugar tanto en el Congreso Federal como en los congresos
locales, así como la gran heterogeneidad en la competencia inter partidista
y la integración de los mismos. Ahí son perceptibles los efectos de las
leyes electorales sobre el sistema de partidos. Así, mientras en la elección
federal del 2000 son notorios los avances hacia un sistema multipartidista
con la existencia de ocho fracciones parlamentarias en la Cámara de Dipu-
tados, constituyendo un hecho sin precedentes en la historia política del
país, al igual que en los estados que antes, durante y después de esa fe-
cha emblemática de la transición mexicana, se multiplicaron y consolida-
ron experiencias de alternancia en todos los rincones del país.

Asimismo, lo que tradicionalmente ha sido una competencia bipartidista
en los estados de la federación, en los últimos procesos locales es visible
que la representación en los congresos se ha elevado en una forma sin
precedente sobre todo en los estados gobernados por el PAN y el Partido
de la Revolución Democrática (PRD). En este caso están los legislativos de
Querétaro y Quintana Roo, con seis y cinco fracciones respectivamente.
Asimismo los estados gobernados por el PRD, Baja California Sur y Za-
catecas con cinco; el Distrito Federal con diez; y Chiapas y Tlaxcala con

seis. Y de los gobernados por el PRI sólo Coahuila, Durango y Sinaloa con cinco, y Puebla con seis.

En suma, de las treinta y dos asambleas y congresos locales, ninguno es bipartidista, nueve son tripartidistas, veinte tienen entre cuatro y seis partidos parlamentarios y, finalmente, dos de ellos tienen más de seis.

No menos importante es el hecho de que de las 32 legislaturas, quince de ellas cuentan con gobiernos divididos,³ lo que significa, si bien no algo inédito en la historia del⁴ país, que en su rendimiento se encuentra uno de los principales retos para la gobernabilidad y la estabilidad de varios estados de la nación.⁵ Ahí, no sólo se encuentra en juego la capacidad de negociación de los partidos políticos, sino sobre todo la capacidad de reinvención de la política en condiciones frecuentemente difíciles de contrapesos políticos. Tenemos, como ejemplo, las experiencias de ejecutivos de los tres principales partidos con legislativos opositores o bien ejecutivos que enfrentan legislativos fragmentados.

El cuadro I nos muestra las numerosas alianzas y coaliciones que se han constituido prácticamente en las dos últimas legislaturas en la mitad de los estados, lo que significa que todos los partidos en determinado momento se han visto en la necesidad de concretar alguna (alianza o coalición) con otros partidos, con el subsecuente efecto sobre la composición de los congresos locales.

³ Asumimos la definición de gobierno dividido que nos ofrece Alonso Lujambio (editor) en su texto *Poder legislativo: Gobiernos Divididos en la Federación Mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Colegio Nacional de Ciencia Política, 1996. En él lo define como "aquel en el que, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó al presidente (o al gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no cuenta con el control mayoritario, esto es, con por lo menos 50 por ciento, más uno de los escaños en la Asamblea Legislativa (o en una de las dos cámaras, si se trata de un sistema bicameral)", p. 9.

⁴ Más aun, la experiencia de los gobiernos divididos en México no es nueva, han aparecido en dos momentos estelares del rediseño institucional: el primero, durante el periodo 1861-62 durante el mandato constitucional del presidente Benito Juárez, cuando la mayoría del legislativo estaba en manos de conservadores que devino en un ambiente favorable para la ingobernabilidad propiciando en 1863 la intervención francesa que impuso a Maximiliano como emperador y, el segundo el de 1911, cuando entra en conflicto el presidente Francisco I. Madero con una Cámara de Diputados bajo una fuerte parálisis legislativa que se tradujo en el golpe de Estado del General Victoriano Huerta en 1913.

⁵ Cfr. de Ernesto Hernández Norzagaray "Transición política y Gobiernos Divididos en México", Ponencia presentada en el I Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas, Salamanca, 2002.

CUADRO I
COMPOSICIÓN DEL CONGRESO FEDERAL Y LOCAL EN MÉXICO

<i>Cámara de diputados federal/local</i>	<i>Legislatura</i>	<i>Partidos electorales y coaliciones*</i>	<i>Partidos parlamentarios</i>	<i>Gobierno dividido</i>
Congreso				
Federal	2000-2003	5	8	Sí
Aguascalientes	LVII 1998-2001	5	3	No
Baja California	XVI 1998-2001	7	3	Sí
Baja California Sur	X 2002-2005	8	5	Sí
Campeche	LVII 2000-2003	9	4	No
Coahuila	LV 1999-2002	9	6	No
Distrito				
Federal	V 2000-2003	11	10	Sí
Colima	LIII 2000-2003	5	4	No
Chiapas	LXI 2001-2004	10	6	Sí
Chihuahua	LIX 1998-2001	8	4	No
Durango	LXII 2001-2004	10	5	No
Guanajuato	LVIII 2000-2003	9	4	No
Guerrero	LVI 1999-2002	8	4	No
Hidalgo	LVIII 2002-2005	8	3	No
Jalisco	LVI 2001-2004	11	4	Sí
México	LIII 2000-2003	11	3	Sí
Michoacán	LIX 2001-2004	3	3	Sí

Las transformaciones que se viven en los estados —y particularmente en Sinaloa— tienen que ver con las tres dimensiones básicas propuestas por Arend Lijphart: la fórmula electoral a través del umbral efectivo, la magnitud de la circunscripción en su variante de *malapportionment* y sus efectos en la proporcionalidad del sistema de partidos y el tamaño del congreso y, por último, el tamaño del congreso que tiene que ver con el dispositivo potencialmente más desproporcional: el “candado de gobernabilidad”.

FÓRMULA ELECTORAL

La elección de diputados y regidores se lleva a cabo mediante los sistemas de mayoría relativa y de representación proporcional, con asignación de

CUADRO I (CONTINUACIÓN)

<i>Cámara de diputados federal/local</i>	<i>Legislatura</i>	<i>Partidos electorales y coaliciones*</i>	<i>Partidos parlamentarios</i>	<i>Gobierno dividido</i>
Morelos	XLVIII 2000-2003	9	3	Sí
Nayarit	XXVII 1999-2002	8	5	Sí
Nuevo León	LIX 2000-2003	8	3	No
Oaxaca	LVII 1998-2001	7	3	No
Puebla	LIV 2002-2005	8	6	No
Querétaro	LIII 2000-2003	8	6	Sí
Quintana Roo	X 2002-2005	8	5	Sí
San Luis Potosí	LVI 2000-2003	10	3	No
Sinaloa	LVII 2001-2004	9	5	No
Sonora	LVI 2000-2003	11	3	Sí
Tabasco	LVII 2000-2003	8	4	No
Tamaulipas	LVIII 2001-2004	11	4	No
Tlaxcala	LVII 2001-2004	11	6	Sí
Veracruz	LVIII 1998-2001	8	4	No
Yucatán	LVII 2001-2004	8	3	No
Zacatecas	LVII 2001-2004	8	5	Sí

* Algunas de estas alianzas, coaliciones o candidaturas comunes son: Coalición Alianza por el Cambio PAN-PVEM en el DF; Coalición por México PRD-PCD-PSN-PT y PAS en Morelos; Coalición por Campeche PT, CD, PAN y PSN; Alianza Democrática Colimense (PT, PCD, PAS, PSN, CD); Alianza por Nuevo León; Alianza por Querétaro (PRD, PAS, CD y PSN); Alianza Frente Cívico Potosino (PVEM y PCP) Alianza por México y San Luis Potosí (PRD, PT, PCD, PAS y PSN); Coalición Unidos por Michoacán (PRD, PT, PVEM, PSN, CD y PAS); Alianza PAN, PRD y PVEM y Alianza por San Ignacio (PT y PAS) en Sinaloa; en Chiapas se conformaron coaliciones en varios municipios: PRD-PT; PRD, PT, PVEM y CD; PT y PVEM; PRD y PVEM; Coaliciones Municipales PRD, PVEM; PT, PVEM; PAS, PT y PVEM en Tamaulipas; Coaliciones PRD, PT; CDPPN en Baja California Sur; CD PPN en Hidalgo; Alianza BC y Alianza PAN, PVEM en Baja California; PRD y PT en Durango y Coalición PAN-PRD en los Municipios de Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva en Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia.

los escaños restantes mediante cociente y resto mayor, en cambio, la de presidentes municipales y gobernadores es sólo por mayoría relativa. El cálculo de la asignación se realiza mediante una serie de figuras contempladas en la ley electoral para el caso de diputados: votación estatal emitida, porcentaje mínimo (umbral), votación efectiva, valor de asignación, cociente natural, valor de asignación ajustado, cociente ajustado, resto mayor. En tanto, para regidores son: votación municipal emitida, vota-

ción municipal efectiva, porcentaje mínimo (umbral), votación efectiva, valor de asignación, cociente natural municipal y resto mayor.⁶

La distribución de escaños mediante el cociente o resto mayor, teóricamente es mucho más proporcional, respecto a la de escaños conforme a la media más alta, siempre y cuando los resultados de los partidos pequeños no sean muy bajos, ni muy grande la distancia que los separe de los partidos mayores.

UMBRAL ELECTORAL EFECTIVO

La ley sinaloense define el umbral electoral como: "el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que se utilizan para asignar a los partidos políticos los diputados y regidores de representación proporcional que conforme a su votación le corresponden".⁷ Este nivel mínimo de apoyo que un partido necesita para obtener representación, en el caso que nos ocupa, es del dos por ciento de los votos en las elecciones legislativas y municipales. Para el acceso al Poder legislativo la ley establece que el rango mínimo es entre dos y cinco por ciento, siempre y cuando acrediten que participan con candidatos a diputados en diez distritos uninominales, mientras en el caso de los regidores, esto se da mediante un sistema de "planillas de candidaturas a Presidentes Municipales y Regidores", donde los partidos integran listas de candidatos al cabildo. El partido ganador obtiene el total de los regidores de mayoría relativa que varía de municipio a municipio y, el resto de regidores, se distribuye mediante el sistema de representación proporcional.

MAGNITUD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

El sistema electoral sinaloense es mixto en la representación política en el Congreso y los cabildos, conjugando la mayoría relativa y la representación proporcional. En esta forma, la ley en la materia contempla veinticuatro diputados de mayoría relativa, que corresponden a otros tantos distritos electorales, y dieciséis de representación proporcional. La demarcación territorial de los distritos electorales se encuentra establecida en el artículo 23 constitucional, que expresamente señala que su magnitud se

⁶ *Ley Electoral del Estado de Sinaloa*, artículos 11 y 13.

⁷ *Ley Electoral del Estado de Sinaloa*, artículo 10.

determinará “teniendo en cuenta la población total del estado. En todo caso, cada municipio tendrá cuando menos un distrito electoral uninominal”. Asimismo, la norma contempla que el estado podrá dividirse “de una a tres circunscripciones plurinominales”.

Entonces, tenemos que en los municipios se privilegia sobre todo la distribución de la población, provocando una desproporcionalidad conocida como el *malapportionment*.⁸ En el cuadro 2 apreciamos con toda claridad, cuáles son los municipios más representados y los menos representados. Entre los primeros se encuentran, para el caso de las legislaturas del periodo 1995 y 1998, los municipios rurales de Cosalá, San Ignacio, Concordia y Elota que de una elección a otra sólo tuvieron un ligero incremento en el costo de su diputado, que se encuentra en tres de ellos por debajo del 50 por ciento en la relación habitantes-escaño. En sentido inverso podemos apreciar una tendencia ascendente en los cuatro municipios más urbanizados y donde se encuentran diez de los veinticuatro distritos electorales de la entidad federativa.

En esta línea llama la atención que en el año 2001, donde la relación señalada en los municipios de Cosalá, San Ignacio, Concordia y Choix, tienda a favorecer una mayor sobre representación en el congreso, es decir, a estos municipios cada vez les cuesta menos obtener un diputado, mientras que a los más urbanos la perspectiva es la contraria. Los distritos electorales de Mazatlán tienen una correlación más alta pues se sitúan por encima de los 190 mil habitantes por cada uno de ellos.

A fin de redondear esta idea, el cuadro 3 muestra con suficiente claridad la desproporcionalidad de la relación habitantes-escaños. Ahí podemos apreciar como los municipios grandes y medianos se encuentran claramente sub representados mientras los pequeños (la mayoría) logran niveles de sobre representación muy elevados. Incluso, llegan a alcanzar por la vía de las diputaciones uninominales hasta un 200 por ciento de diferencia, como sucede en Culiacán y Mazatlán.

⁸ Michael Gallagher ha sugerido que el *malapportionment* puede ser un componente más del sistema electoral: “la desproporcionalidad puede elevarse cuando a algunas zonas de un país o estado le corresponden más escaños en relación con su población”. Cuando el *malapportionment* favorece sistemáticamente determinadas zonas de un país o a determinados partidos. Gallagher afirma que en los sitios donde ha sido un factor significativo, ha implicado “por lo general la sobre representación deliberada de las zonas rurales”. Gallagher, Michael “Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems”, *Electoral Studies*, 10 (1995), 45.

CUADRO 2
MALAPPORTIONMENT EN EL PODER LEGISLATIVO SINALOENSE

<i>Legis- latura</i>	<i>Lista nominal</i>	<i>Habitantes/ escaño</i>	<i>Distritos más representados</i>	<i>Distritos más subrepresentados</i>
1995- 1998	1 231 176	51 299	XVI Cosalá (7 826) XVI San Ignacio (13 239) XXI Concordia (14 460) I Choix (15 648)	XIX Mazatlán (145 115) XII Culiacán (97 833) XIII Culiacán (91 313) III Ahome (90 030)
1998- 2001	1 418 580	59 107	XVI Cosalá (9 304) I Choix (18 390) XI Badiraguato (17 502) XII Concordia (15 559)	XII Culiacán (116 954) XIX Mazatlán (172 151) IV Ahome (103 265) XIII Culiacán (107 699)
2001- 2004	1 545 106	64 379	XVI Cosalá (10 446) XVIII San Ignacio (15 944) XXI Concordia (16 907) XII Badiraguato (18 863)	XIX Mazatlán (192 226) XII Culiacán (129 759) XIII Culiacán (120 641) III Ahome (113 837)

Fuente: Elaboración propia.

La explicación de esta desproporcionalidad en el sistema electoral, como ya lo planteábamos, se encuentra en el principio municipalista de la constitución local, que responde a la filosofía federalista, pero igualmente es determinante la interpretación que hace la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) del artículo del 116 constitucional. Además, no menos importante, son sus consecuencias políticas en cuanto supone poner a buen resguardo el poder de las elites locales, pero de la misma manera perjudica a un sector de ella en los municipios grandes, pues tienen menos distritos que distribuir entre una clase política más numerosa.

Ahora bien, ¿cómo se distribuyó el voto en las mismas elecciones legislativas? En el cuadro 4, podemos apreciar los números absolutos y relativos que lograron los partidos y observar, en la elección de mayoría en 1995, una estrecha diferencia entre los dos más votados, mientras los procesos siguientes abrieron la brecha entre ellos mismos. El PRI y el PAN

CUADRO 3

POBLACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA LEGISLATURA 2001-2004

<i>Municipio</i>	<i>Población por municipio</i>	<i>Porcentaje estatal</i>	<i>Porcentaje de diputaciones de mayoría relativa</i>
Ahome	359 146	14.16	5.0
Angostura	43 827	1.73	2.5
Badiraguato	37 757	1.49	2.5
Choix	29 355	1.16	2.5
Concordia	27 817	1.10	2.5
Cosalá	17 269	0.68	2.5
Culiacán	745 537	29.39	10.0
Elota	49 471	1.95	2.5
Escuinapa	50 438	1.99	2.5
El Fuerte	89 515	3.53	2.5
Guasave	277 402	10.93	5.0
Mazatlán	380 509	15.00	5.0
Mocorito	50 082	1.97	2.5
Navolato	145 622	5.74	2.5
Rosario	47 934	1.89	2.5
Salvador Alvarado	73 303	2.89	2.5
San Ignacio	26 762	1.05	2.5
Sinaloa	85 100	3.35	2.5

Fuente: Elaboración propia.

obtuvieron en 1995 el 84 por ciento, en 1998 el 76 por ciento y en el 2001 casi el 75 por ciento de las preferencias, lo que muestra que las simpatías de los electores siguen favoreciendo a las organizaciones más grandes.

No menos importante es que en estas tres legislaturas el PRD ha manifestado altibajos debido a que en todo el territorio sinaloense, sus apoyos están fragmentados. Lo cual es producto de su incapacidad (hasta hoy) de concentrar sus votos en algunos municipios de manera que optimice sus resultados, lo que lo define como un tercer partido fuerte en las dos primeras legislaturas, mientras que en la del periodo 2001-2004, aun logrando una cómoda tercera posición, le afecta significativa y definitivamente su grado de dispersión electoral. En cambio el PT, que hasta 1998 había sido un partido de ribetes testimoniales en todo el estado, logra en el 2001, un ascenso significativo a partir de la concentración de sus simpatías proveniente de una candidatura carismática en los distritos electorales del puerto de Mazatlán.

El resto de los partidos nacionales padecen el mismo síndrome de dispersión que afecta al PRD sinaloense. Sólo, el PBS emerge en el 2001 como una opción para más de veinte mil electores lo que les permite contar con un diputado en la presente legislatura.

El cuadro 4 nos muestra la votación válida y los porcentajes, de los 10 partidos electorales sinaloenses participantes: PAN, PRI, PRD, PVEM, Partido del Trabajo(PT), Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional (PFCRN), Convergencia por la Democracia (CD), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Partido Alianza Social (PAS), Partido Barzonista Sinaloense (PBS).

Sin embargo, la fórmula electoral no sólo provocó concentración del voto, sino generó desproporcionalidad en cada una de las legislaturas de nuestro estudio. En la del periodo 1995-1998, en un ambiente de alta competitividad, donde la diferencia entre el primer y segundo partido más votado fue de más del 3 por ciento, en este caso, favorable para el PRI, pues al haber obtenido el 43.58 por ciento de los votos, logró 22 diputados que representaron el 55 por ciento de la cámara, gracias al "candado de gobernabilidad". En sentido inverso, tenemos al PAN que con el 40.25 por ciento sólo logró 13 de las posiciones en juego, es decir el 32.5 por ciento, con lo que tuvo una diferencia negativa de casi el ocho por ciento de los escaños con base en una proporcionalidad pura.

140

CUADRO 4

VOTOS Y PORCENTAJES DE LOS PARTIDOS ELECTORALES SINALOENSES

Partidos	Legislatura* (1995-1998)	Legislatura* (1998-2001)	Legislatura* (2001-2004)
PAN	286 231 (40.25)	262 179 (31.85)	229 301 (28.20)
PRI	309 913 (43.58)	385 494 (46.84)	373 312 (45.91)
PRD	94 582 (13.30)	153 943 (18.70)	86 485 (10.64)
PT	10 606 (1.49)	12 389 (1.50)	49 225 (6.05)
PVEM	10 434 (0.67)	8 789 (1.06)	6 071 (0.75)
PFCRN	4 984 (0.70)	no participó	no participó
CD	no existía	no existía	5 077 (0.62)
PSN	no existía	no existía	3 574 (0.44)
PAS	no existía	no existía	8 894 (1.09)
PBS	no existía	no existía	22 591 (2.78)

Fuente: Elaboración propia.

* Votación válida.

En esta misma lógica, el PRD con el 13.3 por ciento de los votos alcanza cuatro diputados y tiene una diferencia negativa del 3.3 por ciento. El resto de los partidos sólo contribuyó a acentuar con sus votos la desproporcionalidad, porque su participación, aun cuando sirvió como votación emitida, no le permitió a ninguno de ellos acceder al poder legislativo local.

La columna de diferencias interpartidarias, como podemos apreciar en la tabla es positiva para el PRI y negativa para el resto de partidos.

Esta tendencia se nota más firme en la elección para diputados de 1998, donde de acuerdo al cuadro 5, es perceptible como el PRI obteniendo prácticamente el 47 por ciento de los votos, logra una representación suficiente en el congreso suficiente para tener una cómoda mayoría absoluta. El partido que resultó más afectado luego de la resolución de la SCJN sobre una controversia constitucional interpuesta por el PRD fue el PAN con un 4.36 por ciento de diferencia entre los disminuidos votos obtenidos y el número de posiciones alcanzadas. Sin embargo, el PRD es el partido que aporta más con un diferencial del 6.2 por ciento entre votos y escaños. El PT y el PVEM, al no alcanzar los mínimos marcados por la ley, quedaron fuera del sistema de representación. En este caso, las diferencias siguen siendo a favor del PRI, mientras los demás partidos continuaron siendo contribuyentes de aquellos beneficios tricolores como lo indica la última columna del cuadro.

Finalmente, los resultados de la elección del 2001, expuestos en el cuadro 6 tuvieron una ligera mejoría para el PRI que obtuvo cerca del 48 por ciento de los votos emitidos, sin embargo, en esta ocasión disminuyó la

CUADRO 5
DESPROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL SINALOENSE
PERIODO 1995-1998

Partido	Votos	%	Escaños	%	Diferencia	+o-
PRI	309 913	43.58	22	55.0	11.42	+
PAN	286 231	40.25	13	32.5	7.75	-
PRD	94 582	13.3	4	10	3.3	-
PT	10 606	1.49	1	2.5	1.01	-
PFCRN	4 984	0.70	No	No	No	No
PVEM	4 795	0.67	No	No	No	No

Fuente: Elaboración propia.

No: No obtuvo diputado.

CUADRO 6
 DESPROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL SINALOENSE
 PERIODO 1998- 2001

Partido	Votos	%	Escaños	%	Diferencia	+ o -
PRI	385 494	46.84	24	60	13.16	+
PAN	262 179	31.85	11	27.5	4.36	-
PRD	153 943	18.70	5	12.5	6.2	-
PT	12 389	1.50	No	No	1.50	-
PVEM	8 789	1.06	No	No	1.06	-

Fuente: Elaboración propia.

No: No obtuvo diputado.

142

sobre representación que tuvo en las anteriores contiendas, ya que su diferencia de votos— escaños sólo fue de una cifra próxima al cinco por ciento. A diferencia de lo que ocurría en el pasado cuando superaba holgadamente el 10 por ciento.

El PAN, como nunca, casi logró hacer equiparable el porcentaje de votos y el de las curules obtenidas como lo refleja la diferencia menor al uno por ciento.

El PRD, por su parte, se mantuvo como el partido más afectado, ya que en él se expresa la mayor diferencia entre ambas variables. El PT fue el partido novedad con los tres diputados que logra en esta legislatura y el PBS, que debuta en la escena electoral, logra en términos porcentuales lo mismo.

Y el resto de partidos, con una cifra superior al tres por ciento, contribuyó en términos prácticos con un tercio de la desproporcionalidad total.

Una conclusión general de los tres casos de desproporcionalidad, es que en la medida en que es menor el número de partidos en competencia es más altamente probable que, con la fórmula establecida en la ley, la desproporcionalidad del sistema sea mayor y en beneficio del partido más votado. En cambio, en un sistema multipartidista, como el manifestado en la última elección, es previsible una mejor proporcionalidad como queda demostrado con la información sistematizada en los resultados de las elecciones del 2001.

Ahora bien, llevada la desproporcionalidad del sistema electoral sinaloense hacia el costo en votos que tuvo para los partidos en las legistatu-

CUADRO 7

DESPROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL SINALOENSE

PERIODO 2001- 2004

Partido	Votos	% votación efectiva	Escaños	%	Diferencia	+/-
PRI	373 312	47.58	21	52.50	4.92	+
PAN	229 301	29.22	12	30	0.77	-
PRD	86 485	11.02	3	7.5	3.52	-
PT	49 225	6.27	3	7.5	1.23	+
PBS	22 591	2.88	1	0.38	0.14	+
PAS	8 894	1.13	No	No	1.13	-
PVEM	6 071	0.75	No	No	0.75	-
CD	5 077	0.62	No	No	0.62	-
PSN	3 574	0.45	No	No	0.45	-

Fuente: Elaboración propia.

No: No obtuvo diputado.

143

ras de nuestro estudio, nos arroja el siguiente resultado expresado en el cuadro 8, que podemos explicar de la siguiente manera:

- Para el PRI que inicia con un mínimo ligeramente superior a los 14 mil votos, ya para el 2001 eleva su costo hasta casi 18 mil votos por diputado.
- Al PAN en 1995, le costó cada uno de ellos poco más de 22 mil votos y, luego de un ligero incremento en 1998, disminuyó hasta un poco más de 19 mil votos por legislador.
- A su vez, el PRD, es el partido al que históricamente le cuesta más cada uno de los diputados en las tres legislaturas, como lo demuestran los más de 23 mil de 1995, los casi 31 mil de 1998 o los cercanos a los 29 mil del 2001, lo que significa prácticamente el doble del valor de los del PRI en 1998 y 2001 y dos tercios de los del PAN en el 2001.

Así también, como corolario de esa desproporción, tenemos que mientras en la legislatura del periodo 2001-2004 al PRD cada diputado le costó una cifra superior a los 28 mil sufragios, al PT sólo 16 mil 408 votos. Una desproporción que encuentra su explicación en el grado de concentración y dispersión de su voto que tiene cada uno de estos partidos en el territorio estatal.

CUADRO 8

COSTO EN VOTOS VÁLIDOS DE LOS ESCAÑOS DE LA LEGISLATURA SINALOENSE
PERIODO 1995-2001. CALCULADO SOBRE VOTACIÓN VÁLIDA

<i>Partidos</i>	<i>Legislatura (1995-1998)</i>	<i>Legislatura (1998-2001)</i>	<i>Legislatura (2001-2004)</i>
PAN	13 (22 017)	11(23 834)	12(19 108)
PRI	22 (14 086)	24(16 062)	21(17 776)
PRD	4(23 645)	5(30 788)	3(28 828)
PT	1(10 434)	No alcanzó umbral electoral	3(16 408)
PBS	No participó	No participó	1(22 591)

Fuente: Elaboración propia.

144

Finalmente, la aplicación de diferentes índices a los resultados producidos por la fórmula del sistema electoral sinaloense, muestra que éste es desproporcional en las tres legislaturas de nuestro estudio, como lo veremos en las páginas siguientes. No podría ser de otra manera si partimos de la idea sostenida por Gallagher de que “cada método para calcular la desproporcionalidad esta inextricablemente unido a la fórmula utilizada para el reparto de los escaños. Cada fórmula de reparto de escaños genera su propio indicador de desproporcionalidad”.⁹ Aunque, como podemos apreciar en el cuadro 9 la desproporcionalidad varía de un índice a otro. Así, el índice elaborado por Douglas Rae, “entiende que la suma de las diferencias entre el porcentaje de escaños y de voto de cada partido debe dividirse por el número de partidos que se están teniendo en cuenta; esto es, halla una media aritmética de la desviación absoluta entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada partido relevante”.

Este índice, según Lijphart, tiene la debilidad de que “minusvalora la desproporcionalidad de los sistemas multipartidistas, con varios partidos pequeños”. Así también, Loosemore-Hanby sugieren tener en cuenta la suma de las diferencias absolutas entre votos y escaños de cada partido y dividir ese sumatorio entre dos, en lugar de por el número de partidos, como lo plantea Rae.

⁹ Gallagher, Michael (1991), “Proportionality, disproportionality and electoral systems”, *Electoral Studies*, vol. 10, 1 p.38.

También está el caso de Gallagher que ha propuesto el índice de cuadrados mínimos que se encuentra entre el de Rae y el Loosemore-Hanby, en cuanto pone el énfasis en las “pequeñas desviaciones”. Saint Lagüe, por su parte, basa su índice en la diferencia relativa escaños-votos ya que lo calcula “sumando el resultado de dividir por el porcentaje de voto el cuadrado de la diferencia entre los porcentajes de escaños y de voto de cada partido”.¹⁰

La interpretación del cuadro 9 debería hacerse tomando en consideración los dos elementos que se agregan a la disparidad de criterios de los índices: Uno, que en la medida en que haya una alta concentración del voto, como sucedió en las elecciones legislativas de 1995 y 1998, es mayor la desproporcionalidad del sistema electoral, en cambio, en el otro elemento, en donde se afirma el multipartidismo, ésta tiende a disminuir significativamente en todos los índices (Ver anexo sobre índices politológicos).

La aplicación de los índices a los resultados de las elecciones legislativas de 1995 arroja una desproporcionalidad que va de 5.87 en Rae hasta un 11.74 de Loosemore-Hanby, pasando por el de Gallagher y el Saint Lägüe que oscila entre seis y 10 puntos, lo que significa que la alta competitividad electoral de ese año mostró que en cualquier escenario el desenlace es desigual.

CUADRO 9

DESPROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL SINALOENSE CONFORME A VARIOS ÍNDICES

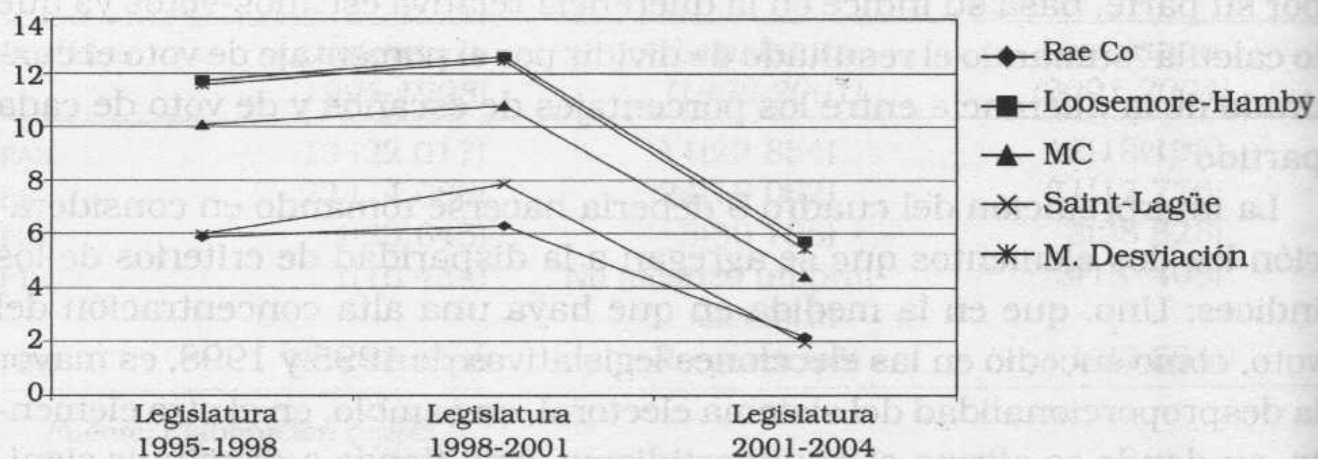
Desproporcionalidad	Índice de Douglas Rae	Índice de Loosemore- Hanby	Índice de Gallagher Cuadrados Mínimos	Índice de Saint-Lagüe	Índice de mayor desviación
Legislatura (1995-1998)	5.87	11.74	10.06	5.99	11.74
Legislatura (1998-2001)	6.31	12.61	10.79	7.85	12.61
Legislatura (2001-2004)	2.16	5.41	4.41	1.94	5.41

Fuente: Elaboración propia.

¹⁰ Oñate, P. y Ocaña, Francisco (1999), “Análisis de datos electorales”, *Cuadernos metodológicos*, núm. 27, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

GRÁFICA 1

DESPROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL SINALOENSE
CONFORME A VARIOS ÍNDICES



Fuente: Elaboración propia.

Una situación similar ocurre con los resultados de 1998, donde encontramos que se mantiene en todos los casos una clara tendencia hacia la desproporcionalidad. En cambio, los resultados del 2001 muestran en todos los índices, una tendencia significativa hacia la baja, producto de la ampliación de la representación política del legislativo. Un factor que influye de manera importante en todos ellos es el carácter desproporcional del “candado de gobernabilidad”, pero también la diferencia existente entre votos y escaños, los cuales al pasar por el filtro de los énfasis de las fórmulas ofrecen distintos valores. Pero esto no quiere decir que haya una confusión, sino que indicaría si se tomaron en cuenta o no, aquellos partidos que lograron el umbral legal o el total de los partidos electorales.

La pregunta pertinente es ¿hasta qué punto esos niveles de desproporcionalidad en el sistema de competencia son altos, o bien bajos, con base en una comparación del rendimiento de los sistemas electorales? Arend Lijphart en sus estudios sobre 70 democracias contemporáneas encontró que la desproporcionalidad es inherente, congénita, a los sistemas electorales tanto proporcionales como mixtos, opinión que compartimos.

Basta ver los siguientes ejemplos, que aunque se encuentran muy lejos de nuestra realidad, nos ofrecen un referente consistente para darnos una idea comparada de los niveles de desproporcionalidad que tiene Sinaloa, la cual seguramente podría ser similar a las de muchos otros estados

de la República. Lijphart, para quien la fórmula de Gallagher es la más conveniente, llegó, mediante la aplicación de los mínimos cuadrados, a los siguientes resultados en las democracias consolidadas: Alemania alcanza el 3.80; Australia 9.61; Estados Unidos 5.41; Francia 3.65; España con 8.95, hay algunos países, donde la desproporcionalidad es prácticamente insignificante como sucede con Dinamarca con 1.81; Holanda 1.29 e Italia con 1.56.¹¹

A reserva de un estudio con realidades más afines, lo que observamos es que el sistema electoral, en la medida que la ventaja es mayor del primer partido sobre el resto, disminuye el costo en votos para aquel en perjuicio de las otras opciones. Asimismo, en la medida que se estrecha la diferencia, ésta tiende a disminuir en beneficio de una mejor proporcionalidad de los resultados electorales.

Sin embargo, el sistema electoral ha impuesto lo que técnicamente constituye la barrera legal constitucional, es decir, que "en ningún caso un partido podrá contar con más de 24 diputados por ambos principios".¹²

SISTEMA MIXTO DE REPRESENTACIÓN

El sistema mixto con lista adicional de la legislación electoral sinaloense, es un sucedáneo de las reformas que se iniciaron en el nivel federal en 1977, donde producto de ellas cada tres años se eligen veinticuatro diputados por distrito de mayoría relativa y dieciséis por el de representación proporcional. También en Sinaloa se produjo el cambio de un sistema restrictivo, como era el que producía "diputados de partido", a otro, que si bien seguía teniendo dosis discrecionales, buscaba hacer el sistema menos desproporcionado, de tal suerte que emergiera un verdadero sistema de partidos que recuperara parte de la legitimidad perdida durante los años de elecciones sin competencia.

La reforma de 1979, al incorporar las líneas más gruesas del diseño federal, estableció el umbral del 1.5 por ciento de la votación efectiva en la elección de diputados para alcanzar representación en el congreso local.

¹¹ Lijphart, Arend (1994), *Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 229-231.

¹² Constitución Política del Estado de Sinaloa, Art. 24.

Fue a partir de la reforma de 1992, cuando el sistema se volvió mixto con dominante mayoritario, en el cual el partido más votado, que en este caso era el PRI, tuvo un tope máximo de 24 de los 40 diputados. De estos últimos, 24 eran de mayoría relativa y 16 por el principio de representación proporcional, repartidos entre los partidos que habiendo superado el umbral mínimo no hubiesen obtenido triunfos en el total de los distritos uninominales.

La asignación se hacía mediante el método de cociente y resto mayor que tácitamente implicaba una distorsión en la relación votos— escaños, sobre todo si era el PRI que lograba triunfos de mayoría en los distritos.

El carácter municipal de los distritos electorales, que hasta ahora favorece mayoritariamente al PRI, significa para ese partido una suerte de diputaciones automáticas que provocan una desproporción en el sistema de representación. Los distritos rurales con menos votantes tienen una sobre representación frente a los urbanos, ya que por ejemplo, mientras el distrito XVI con cabecera en Cósala, con aproximadamente 17 mil habitantes, produce un diputado, lo mismo ocurre con el distrito XIX con sede en Mazatlán, que supera los 190 mil, lo anterior se ve compensado con las diputaciones plurinominales que disminuye la desproporcionalidad. Aún así, la combinación de ambas sigue siendo considerable en perjuicio de la representación urbana sobre la rural.

Los partidos que habiendo logrado una votación insuficiente para alcanzar representación en el Congreso, al no rebasar el umbral electoral, reducen el costo en votos de los partidos grandes. Esta tendencia, sin ser hasta ahora muy importante como lo podemos ver en el cuadro 5, ha provocado efectos de sobre y subrepresentación en prácticamente todas las legislaturas del periodo de estudio.

TAMAÑO DEL CONGRESO Y “CANDADO DE GOBERNABILIDAD”

Las determinantes políticas y constitucionales del tamaño del Congreso (“total de escaños de la Cámara Legislativa”) produjeron, como lo hemos visto, un sistema mixto fuerte. Más aun, cuando el criterio de la ley electoral que produce este sistema combina el criterio demográfico con la variante geográfica mediante el reconocimiento de los diputados por municipios, incrementando el número de diputaciones en los centros urba-

nos del estado. Así los municipios de Ahome, Guasave y Mazatlán tienen dos distritos y Culiacán cuatro, mientras el resto sólo cuenta con uno.

Ahora bien, si el caso de los escaños de mayoría relativa está claramente definido por la naturaleza de la fórmula de asignación, es diferente en lo que respecta a las de representación proporcional. La distribución de las dieciséis posiciones de RP parte de una base desproporcional producto del umbral electoral de la propia ley, lo que nos obliga a las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de partidos tienen derecho a uno o más escaños por esta vía?, ¿cuáles son los rangos porcentuales para ganar una o más de esas posiciones?, ¿a qué partido benefician principalmente los restos mayores?. Pero, antes de responder cualquiera de estas preguntas surge otra, ¿cuál es el efecto adicional que tiene sobre el grado de desproporcionalidad la correlación votos-escaños?

El tamaño de la Asamblea Legislativa ha sido uno de los temas menos estudiado de la Ciencia Política ya que la mayoría de los especialistas ven en ella una consecuencia natural del sistema electoral, antes que una parte importante de la conversión de votos en escaños. Incluso, como lo veremos a la luz del sistema electoral sinaloense, puede aumentar su desproporcionalidad en caso de agregar o disminuir su número.

La Ley Electoral del estado de Sinaloa establece en el artículo 12, fracción 1, cláusula A, que sólo tendrán derecho a diputados por este principio, aquellos partidos que hayan registrado candidatos en por lo menos diez distritos por mayoría relativa y, además, hayan permanecido durante todo el proceso electoral y hubieren alcanzado un mínimo del dos por ciento de la votación emitida en el estado.

Este mecanismo reductor del ordenamiento en la materia nos lleva a su fase dosificadora, ya que todos los partidos que habiendo cubierto el mínimo señalado y se encuentren entre el dos y el cinco por ciento tienen derecho a un diputado, de acuerdo al artículo 12, fracción II, cláusula B,

Una vez hecha esta asignación, se aplica lo que en el argot electoral se conoce como "cláusula de gobernabilidad", es decir, el mecanismo que de acuerdo al mismo artículo, expresamente señala que el partido que estando en el rango que va del 35 al 52.5 por ciento de la votación estatal emitida obtendría "tantos diputados de representación proporcional como sean necesarios para completar por ambos principios un total de 21 diputados". Es decir, el 50 por ciento más uno, de la Cámara de Diputados.

Entonces, si ningún partido logra estar por encima de ese rango, se

asignan de acuerdo al artículo 12, fracción II, cláusula C, numeral 1 "mediante la suma de votación efectiva de todos los partidos políticos que obtuvieron más del cinco por ciento de la votación, con excepción del partido que ya se le distribuyó diputados conforme a la cláusula B y que se divide entre el número de diputados de representación proporcional que queden por repartir".

Luego, la ley en los siguientes numerales expresamente establece tres pautas de asignación de las diputaciones de representación proporcional restantes:

1. Se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de diputados de representación proporcional que a cada partido político se le asignará.
2. Si algún partido llega al máximo de curules establecidos en esta ley, continuará la asignación de diputaciones plurinominales restantes mediante la aplicación de valor asignación y el cociente ajustados
3. En cualquiera de los casos anteriores, si aun quedasen curules por repartir, se asignarán aplicando los restos mayores.

La llamada "cláusula de gobernabilidad" es un arma de dos filos, ya que mientras es capaz de garantizar la gobernabilidad de un sistema político, también constituye un mecanismo riesgoso de la ingeniería electoral, en cuanto busca compensar lo perdido en condiciones de mediana a alta competencia interpartidista. Es, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, un "ordenador compensatorio" de un sistema proclive a la desproporcionalidad. Por lo tanto, la cláusula que protege al partido más votado, incrementa la desproporcionalidad en condiciones de alta competencia y esto, en lo que podríamos considerar un efecto *boomerang*, pudiera revertírsele en un escenario de fuerte desplazamiento del electorado hacia una segunda opción.

Ahora bien, imaginemos un escenario hipotético de competencia extrema donde se distribuyen 100 escaños entre cinco partidos por la vía de la representación proporcional donde el partido más votado, con 35 por ciento de los votos tiene asegurados 51 diputados por el beneficio del "candado de gobernabilidad". Los otros 49 escaños son distribuidos entre los partidos que obtuvieron el 65 por ciento de los votos, donde el partido B con un 30 por ciento de los votos emitidos alcanza 23 escaños, el partido C

obtendría 15 con el 20 por ciento de los sufragios y el D 11 con el 15 por ciento de los votos emitidos.

En suma, podemos ver que los tres últimos partidos aportaron una parte de sus votos (y diputados) a una bolsa para que el primero lograra tener mayoría absoluta en la cámara.

Los estudios de Lijphart sobre el tamaño de la asamblea están íntimamente ligados con el umbral electoral ya que si este es alto, simplifica las preferencia a unas pocas opciones, lo que aumenta la desproporcionalidad en el sistema. Quizá por eso Lijphart concluye diciendo: "que la desproporcionalidad es, por lo general, más baja en las asambleas mayores."¹³ Y más alta en las pequeñas.

Finalmente, resulta pertinente la pregunta ¿qué pasa si disminuye el número de diputaciones plurinominales, como algunos sectores políticos lo demandan en Sinaloa?. Además, de las reacciones naturales de descontento de los partidos pequeños que ven en peligro su representación en el Congreso, es previsible que éste reacomodo de los dieciséis diputados de RP favorecerían, principalmente, a los partidos grandes, que han demostrado a lo largo de la historia electoral su predominio en la competencia por los distritos de mayoría relativa, aunque no se descarta, como lo ha demostrado la historia reciente, que uno o varios partidos pequeños, apoyados en un candidato carismático con un programa de corte populista, pudieran ganar este tipo de circunscripciones.

Más aún, habría que agregar como un elemento de desproporcionalidad el que se encuentra en la llamada estructura del voto. La ley electoral si-

CUADRO 10

CANDADO DE GOBERNABILIDAD Y DESPROPORCIONALIDAD

Partidos	Votos %	Desproporcionalidad simple en la asignación de diputados (%)
A	35	51
B	30	23
C	20	15
D	15	15

Fuente: Elaboración propia.

¹³ Lijphart, Arend *ob cit.*, p.156.

naloense establece una papeleta para cada tipo de elección, lo cual significa que los ciudadanos pueden distribuir sus votos entre las distintas opciones que ofrecen los partidos. Así las cosas, podemos encontrar que el voto para gobernador es por el partido A, mientras el voto para diputados por mayoría relativa por el partido B, lo mismo en el caso de la lista única estatal donde el votante está en disposición de sufragar por el partido C, como también en la elección de la presidencia municipal donde cruza la papeleta por el D. Más aun, en la elección de síndicos por el partido E o en su defecto, por una candidatura común o coalición interpartidaria.

152

A este reparto del voto, como ya lo señalamos, se le conoce como voto ordinal, es decir un tipo de voto que "permite que el mandato de cada votante se disperse entre varios partidos, provocando consiguientemente una suerte de micro fragmentación". Y de ésta manera, al producir cada elección sus propias micro fragmentaciones "dan lugar a sistemas de partidos electorales más fragmentados que los que encontramos en otro tipo de elecciones"¹⁴ más categóricas (donde sólo se puede votar por los candidatos de un partido).

Las tres elecciones locales ocurridas desde 1995, tienden a confirmar una tendencia observable desde principios de los ochenta, cuando franjas del electorado preferentemente urbanas, alteraron la hegemonía priísta en los cuatro principales municipios. Si bien la disputa bipartidista por el gobierno del estado se daba en un contexto de lucha de posiciones que no llegaban a poner en peligro la continuidad del tricolor, dado los beneficios que obtenía de la fórmula electoral y el tamaño de las circunscripciones. Sí, en cambio, son manifiestos los desplazamientos del electorado en los municipios y distritos urbanos.

Sin embargo, habría que distinguir dos momentos. Uno, el que se da en los ochenta, cuando el electorado urbano favorece el bipartidismo y dos, con una tendencia *in crescendo* durante los noventa, cuando son perceptibles en las estadísticas electorales las manifestaciones del llamado voto dual o coloquialmente conocido como "voto cruzado", es decir, aquel tipo de sufragio donde el elector lo divide entre los distintos partidos, de tal suerte que modifica la geografía del voto y, en ocasiones, los propios pesos partidarios en el sistema de representación.

¹⁴ Arend Lijphart *ob cit.*, p.173.

CONCLUSIONES

La aplicación de los distintos índices politológicos a la realidad del estado sinaloense nos muestran que estamos frente a una fórmula electoral, que es en lo fundamental, similar a la de otras entidades de la federación, donde el umbral mínimo se sitúa en el dos por ciento y que a la vista del comportamiento electoral de las dos primeras consultas no ha significado una alteración en la competitividad electoral y parlamentaria.

Sin embargo, en la tercera consulta con una mayor fragmentación, elevó hasta cinco partidos los representados en el Congreso local, lo que pudiera estimular a las fuerzas políticas que se inclinan por la eliminación o disminución de la representación proporcional en beneficio de la uninominal. Que no es poca cosa, cuando los resultados que arrojan nuestros niveles de desproporcionalidad nos ubican comparativamente con países considerados como muy desproporcionales. Una reducción, sin duda, dejaría en una situación en extremo difícil para la sobrevivencia de los partidos pequeños.

Es más, se pondría en riesgo la desaparición del sistema multipartidista que se ha venido conformando en los últimos años, ya no sólo en el nivel electoral, sino sobre todo en la representación política. Habría que desaparecer en todo caso el llamado "cláusula de gobernabilidad", que representa un riesgo mayor ya que aumenta la desproporcionalidad del sistema electoral sinaloense. Una eventual desaparición, si bien no agrega votos a algún partido, técnicamente garantiza una mayor equidad en cualquier sistema electoral con pretensiones de perfeccionamiento democrático.

ÍNDICES POLITOLÓGICOS

Índice de Gallagher: Usamos el índice de desproporcionalidad creado por Michel Gallagher de mínimos cuadrados que es una vía entre en los de Douglas Rae y Loosemore-Hanby. Este índice "registra con mucha más fuerza unas pocas desviaciones grandes que muchas pequeñas". Se calcula de la siguiente manera, se elevan al cuadrado las diferencias en los porcentajes en los votos y escaños y luego se suman; ese total es dividido por dos y, finalmente, se saca la raíz cuadrada de tal valor.

$$MC = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1, w>0}^n (v_i - e_i)^2}$$

Gallagher, Michel, *Proportionality, Disproportionality and electoral Systems*, *Electoral Studies*, 10, 1991, (p. 38-40). Citado Por Arend Lijphart *op. cit.* (p.107).

Índice de Rae: La medida de desproporcionalidad propuesta por Douglas Rae "utiliza sencillamente la media de las desviaciones". Se calcula de la siguiente manera, se suman las diferencias absolutas entre los porcentajes de votos (v_i) y los de escaños (e_i), y lo divide por el número de partidos (n).

154

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |v_i - e_i|$$

Rae, Douglas W., *The Political Consequences of Electoral Laws* (2° ed., New Haven, Conn: Yale University Press, 1971), 84-86. Citado Por Arend Lijphart *op. cit.* (p.104.)

Índice de Loosemore-Hanby: El índice propuesto por John Loosemore y Victor J. Hanby es el porcentaje total de sobre representación de los partidos sobre representados, que, naturalmente es el mismo que el porcentaje total de sub representación. A diferencia del índice de Rae, que registra la desviación media de la proporcionalidad por partido, el índice de Loosemore-Hanby registra la desviación total. Se calcula de la siguiente manera: se suman los valores absolutos de todas las diferencias entre los porcentajes de votos y escaños como en el índice de Rae, pero se divide entre dos, en lugar de dividir por el número de partidos como en el de Rae.

$$D = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |v_i - e_i|$$

Loosemore, John y Hanby, Victor J "The Theoretical Limits of Maximum Distortion: Some Analytic Expressions for Electoral Systems", *British Journal of Political Science*, 1971, p. 467-477. Citado por Arend Lijphart *op. cit.* p.106.

Índice de Saint Lagüe: La fórmula con la que se calcula el índice de desproporcionalidad de Saint Lagüe es la siguiente:

$$SL = \sum_{i=1, v_i > 0}^n \frac{(e_i - v_i)^2}{v_i}$$

Oñate, Pablo y Ocaña, Francisco A., "Análisis de datos electorales", *Cuadernos Metodológicos* Núm. 27, Madrid, Centro de Investigaciones Metodológicas. 1999, p. 29.

Donde (v_i) es el porcentajes de votos y (e_i) los de escaños, y (n) el número de partidos.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMOND, GABRIEL *et al.* (1992), *Diez textos básicos de Ciencia Política*, Barcelona, Editorial Ariel.
- ANDUIZA, EVA *et al.* (1999), "Metodología de la Ciencia Política", *Cuadernos Metodológicos*, núm. 28, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- BECERRA, RICARDO, JESÚS GALINDO, MANUEL PALMA y JOSÉ WOLDENBERG (1996), *Así se vota en la República. Las Legislaciones Electorales en los Estado*, México, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, AC.
- BOBBIO, NORBERTO *et al.* (2000) *Diccionario de Política*. México, Siglo XXI editores.
- _____ (1996) *Votar en los Estados. Análisis comparados de las Legislaciones electorales en México*, México, Fundación Friedrich Naunmann-CIDE-Miguel Ángel Porrúa.
- GALLAGHER, MICHAEL (1991), "Proportionality, disproportionality and electoral systems", *Electoral Studies*, vol. 10, 1 (33-51)
- HERNÁNDEZ NORZAGARAY, ERNESTO (1997), *La Liberalización Política Mexicana. Legislación y proceso electorales en los estados de Baja California, Michoacán y Sinaloa (1977-1992)*, México, Universidad Autónoma de Sinaloa.
- _____ y ROCHA, MARÍA MAGDALENA (2000), "Geografía política de Sinaloa: regiones, votantes y poder", en *La geografía del poder y las elecciones en México*, coordinado por Gómez, Silvia y Valdez María Eugenia, México, Instituto Federal Electoral, Plaza y Valdez Editores.
- _____ (2001), "Ley electoral, organización y desempeño de los partidos en las elecciones locales sinaloenses, 1980-1998" en *Estudios Sociales, Revista de Investigación del Noroeste*, vol x, núm. 20, México, Centro

de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. El Colegio de Sonora.

ISLAS, ALFREDO, "IFE mandering". *Revista Voz y Voto*, núm.11, 15 de mayo de 2002.

LIJPHART, AREND (1994), *Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos. Un estudio de veintisiete democracias 1945-1990*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Marotta, Emanuel, *Sistemas electorales*, en *Diccionario de Política*, coordinado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Siglo XXI editores, 12va. Edición.

MONTABES, JUAN (ed.) (1998), *El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimientos del sistema electoral español (1977-1997)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

NOLHEN, DIETER. (1994), *Sistemas electorales y partidos políticos*, México, Fondo de Cultura Económica/UNAM.

OÑATE, PABLO Y OCAÑA, FRANCISCO A. (1999), "Análisis de datos electorales", Cuadernos Metodológicos núm. 27, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

PARAMIO, LUDOLFO (1991) "El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la década de los noventa", Madrid, *Revista de Estudios Políticos*, núm.74, Centro de Estudios Constitucionales.

PRZEWORSKI, ADAM (1995), *Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*, Gran Bretaña, University Press, Cambridge.

RAE, DOUGLAS W. (1971), *The Political Consequences of Electoral Laws*, New Haven, Yale University Press.

_____ (1993), "Análisis del sistema electoral español en el marco de la representación proporcional", en Douglas W. Rae y Victoriano Ramírez, *Quince años de experiencia. El Sistema electoral español*, Madrid, McGraw-Hill.

SARTORI, GIOVANNI (1987), *Partidos y sistemas de partidos*, Madrid, Alianza Editorial.

TAAGEPERA, REIN Y MARKUU LAAKSO (1980), "Proportional profiles of West European electoral systems", *European Journal of Political Research*, 8 (423-446).

_____ y MATTHEW S. SHUGART (1989), *Seats and Votes: The effects and determinants of electoral systems*. New Haven, Conn. Yale University Press.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. xv, Febrero del 2002, Tesis: p/j 4/2002.

WOLDENBERG, JOSÉ, SALAZAR PEDRO, BECERRA RICARDO, *La Mecánica del Cambio Político en México. Elecciones, Partidos y Reformas*, México, Cal y Arena, 2000.

Documentos

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 2000.

Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 1995.

Consejo Estatal Electoral, *Memoria del Proceso Electoral 1995*.

Consejo Estatal Electoral, *Memoria del Proceso Electoral 1998*.

Consejo Estatal Electoral, *Memoria del Proceso Electoral 2001*.